

Una década en disputa

Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina

GUSTAVO ANTÓN

Sociólogo, becario doctoral CONICET-IIGG, doctorando en Ciencias Sociales (UBA).

JORGE CRESTO

Sociólogo, becario doctoral CONICET-IIGG, doctorando en Ciencias Sociales (UBA).

JULIÁN REBÓN

Doctor en Ciencias Sociales, UBA. Investigador del CONICET. Director del Instituto de Investigaciones "Gino Germani" de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

RODRIGO SALGADO

Sociólogo, magíster en Investigación en Ciencias Sociales, UBA. Becario doctoral CONICET-IIGG.

Resumen

El presente trabajo aborda la evolución de las luchas sociales en la Argentina durante la última década, en su relación con las transformaciones ocurridas en dicho período en el contexto político y económico.

A su vez, a partir del estudio de casos emblemáticos, busca ejemplificar las principales tendencias de las mismas durante el período. En tal dirección, los autores analizan el comportamiento expresado por los trabajadores ocupados y los trabajadores desocupados, así como también el proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, el proceso de luchas en defensa del medioambiente, las movilizaciones en demanda de "seguridad" y, por último, el conflicto desarrollado entre el Gobierno nacional y los propietarios agropecuarios.

Abstract

The article reviews social struggle development in Argentina over the past decade, as regards economic and political transformations that came about over the same period. In addition, on the basis of the examination of notable examples, dominant trends of such transformations over the past decade are presented. In this regard, the writers study the behaviour of workers and the unemployed, as well as the process by which workers recover possession of companies, the process in favour of environmental protection, demonstrations to demand "safety" and, finally, the conflict between government and farmers.

Palabras clave

Argentina, movimientos sociales, conflictividad, acción directa, cambio social

Keywords

Argentina, social movements, conflict, direct action, social change

Cómo citar este artículo

Antón, Gustavo; Cresto, Jorge; Rebón, Julián y Salgado, Rodrigo 2010 "Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año XI, N° 28, noviembre.

Introducción

La sociedad argentina experimentó en los últimos años una serie de transformaciones de gran importancia. Ingresó a la década del dos mil en medio de una grave crisis política y económica, cuyo momento más álgido se registró hacia finales de 2001 y comienzos de 2002, cuando los índices de desocupación, pobreza e indigencia se incrementaron significativamente en medio de una fenomenal depresión económica y se sucedieron cinco presidentes en menos de dos semanas. Sin embargo, luego de atravesar el momento más agudo de esta profunda crisis, el país experimentó un proceso de recomposición institucional, política y económica hasta comienzos de 2008. Hacia finales de la década, la sociedad ingresó en una nueva crisis política –de menor importancia en comparación con la experimentada a comienzos de la década– y en un proceso de desaceleración del crecimiento económico.

En paralelo –y en relación con estas mutaciones– la movilización social vivió una serie de transformaciones. La protesta social generalizada y el heterogéneo proceso de autonomización que caracterizaron a la lucha social durante los momentos más intensos de la crisis evolucionarán, a partir de la recomposición institucional, hacia una conflictividad de carácter menos intensa, más institucionalizada y con un renovado protagonismo del movimiento de los trabajadores organizados. Finalmente, hacia fines de la década se intensificarán la protesta y la autonomización en un contexto de emergencia de protestas con características regresivas y politización del conflicto.

El presente trabajo explora descriptivamente la evolución de las luchas sociales de la década en su vinculación con las transformaciones políticas, económicas y sociales ocurridas en la Argentina. En esta dirección, primero se expone una periodización de la evolución de la lucha social. Posteriormente, se analiza la evolución de los procesos de movilización y protesta de los actores más dinámicos del período entre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los trabajadores desocupados. Por otra parte, también se analizan procesos considerados emblemáticos de la conflictividad de las distintas etapas: las recuperaciones de empresas, los movimientos socio-ambientales y los procesos de movilización con carácter social regresivo. Finalmente, se plantea una serie de interrogantes sobre el carácter social que expresa la evolución de las luchas y la totalidad social a ellas

vinculada, planteando tensiones y desafíos que se presentan en la perspectiva de la construcción de una estrategia emancipatoria.

Las fuentes de datos utilizadas en el presente trabajo incluyen una revisión de las cronologías del conflicto social elaboradas por el Observatorio Social de América Latina (OSAL), de CLACSO, sobre la base de la prensa escrita, el análisis de datos estadísticos sobre *hechos de rebelión*, que elabora el Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA), basados en dichas cronologías –los cuales nos fueron generosamente facilitados por este programa–, la incorporación de diferentes avances investigativos que los autores hemos desarrollado en el marco del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social (PICASSO), con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, así como el análisis de avances investigativos de otros autores pertinentes a la temática.

Periodización

La década no encuentra una continuidad en cuanto a la evolución de la protesta y disconformidad social. A grandes rasgos, pueden distinguirse al menos tres períodos que guardan estrecha relación con la evolución política y social del país.

Como se observa en el Cuadro 1, el primer período puede situarse hasta 2002 inclusive¹. Está enmarcado por el agotamiento del modelo resultante de la reestructuración capitalista regresiva de los noventa –denominado “neoliberal” por la doctrina que lo nutrió– y el desarrollo de una inusitada crisis que se generalizó en todo el orden social. La agudización de la crisis promoverá la renuncia del gobierno de Fernando De la Rúa (1999-2001), de la Alianza (un frente conformado por la Unión Cívica Radical y el Frente País Solidario), en un contexto de saqueos y protestas generalizadas que incluyó en la Ciudad de Buenos Aires una de las movilizaciones de carácter semi-espontáneo más masivas en la historia del país. Este período está caracterizado por el malestar y la protesta social generalizada y creciente, y la emergencia de nuevos movimientos sociales –movimientos de empresas recuperadas por sus trabajadores, asambleas barriales, movimientos de ahorristas bancarios– y el desarrollo de otros movimientos surgidos previamente como los movimientos de trabajadores desocupados o piqueteros. Se desarrolla un proceso de autonomización de diferentes personificaciones sociales que no están dispuestas a delegar la defensa de sus intereses en las heteronomías políticas y sociales y en los canales institucionales. El desarrollo inusitado de la acción directa –las configuraciones de acciones no mediadas por los canales institucionales dominantes para el procesamiento de los conflictos– es un claro indicador de este proceso. Es un período caracterizado también por el enfrentamiento a procesos expropiatorios y sus resultantes en distintas dimensiones. La creciente politización del país se va a expresar en demandas de cambios económicos y políticos, estos últimos representados emblemáticamente en la consigna “que se vayan todos”, popularizada hacia fines de 2001. A pesar de los distintos procesos de unificación de la heterogénea protesta y autonomización emergente, en el momento de mayor intensidad de la conflictividad la movilización tenderá a expresar diversas fracturas y contradicciones, no pudiendo constituirse desde los sectores populares una direccionalidad estratégica que la articule.

El segundo período podría delimitarse entre 2003 y 2007. Está contextualizado por el desarrollo y la consolidación del proceso de recuperación económica y de recomposición política iniciado a mediados de 2002. La descomposición del anterior modelo de acumulación abre espacio a una situación de disputa en la cual la expansión productiva desplaza al anterior peso de la valorización financiera y, dentro de ella, la industria y el agro ganan peso frente al sector de servicios. En el campo político, se consolida una nueva alianza social en el gobierno del Estado nacional que produce rupturas políticas y económico-sociales significativas con los gobiernos de la década anterior². Con el correr de los años, se producirá un cambio en la morfología de las luchas populares. Ante el nuevo contexto, algunos actores del período anterior tenderán a desaparecer –las asambleas barriales, por ejemplo– y otros a desmovilizarse crecientemente, como, por ejemplo, los piqueteros. Reemergerá con nuevo protagonismo el movimiento obrero y sindical. La lucha se desplazará de enfrentar procesos expropiatorios a la confrontación de las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. En paralelo a estas tendencias y desplazamientos se produce una marcada institucionalización de las acciones de lucha. No obstante, la acción directa seguirá siendo significativa, sobre todo para actores no institucionalizados³. También emergen nuevos movimientos sociales, como los movimientos contra la inseguridad, o los socioambientales, mientras que el movimiento por los derechos humanos renueva su dinámica de movilización⁴.

Por último, en 2008 se abre un nuevo período en la evolución de la conflictividad social. Estará caracterizado por una ralentización del crecimiento económico y el desarrollo de una crisis política de la alianza en el gobierno. Nuevamente crecen las acciones de lucha y la propensión a la acción directa, pero la novedad será su conducción por sectores de la burguesía en sus diferentes personificaciones sociales. Emerge una renovada politización del conflicto que tiende a polarizarse a favor o en contra del gobierno nacional. En particular, el denominado conflicto del campo expresará un intenso proceso de autonomización y movilización personificado centralmente por corporaciones con metas regresivas en lo político y lo económico. Aún en desarrollo, la duración y características de esta etapa dependerán de la evolución económica, la dinámica de las confrontaciones políticas y la capacidad del sistema político para procesar institucionalmente a estas últimas.

A continuación, presentamos la evolución de los procesos de movilización y protesta de los actores más dinámicos del período entre los sectores populares: los trabajadores asalariados ocupados y los trabajadores desocupados o piqueteros. Asimismo, presentamos una breve descripción de los procesos emblemáticos de la primera y segunda etapa de la conflictividad, los denominados procesos de recuperación de empresas y los movimientos socio-ambientales. Por último, exponemos el desarrollo de los procesos de movilización con carácter social regresivo, que como ya hemos señalado alcanzan su cúspide en la última etapa de conflictividad que hemos delimitado.

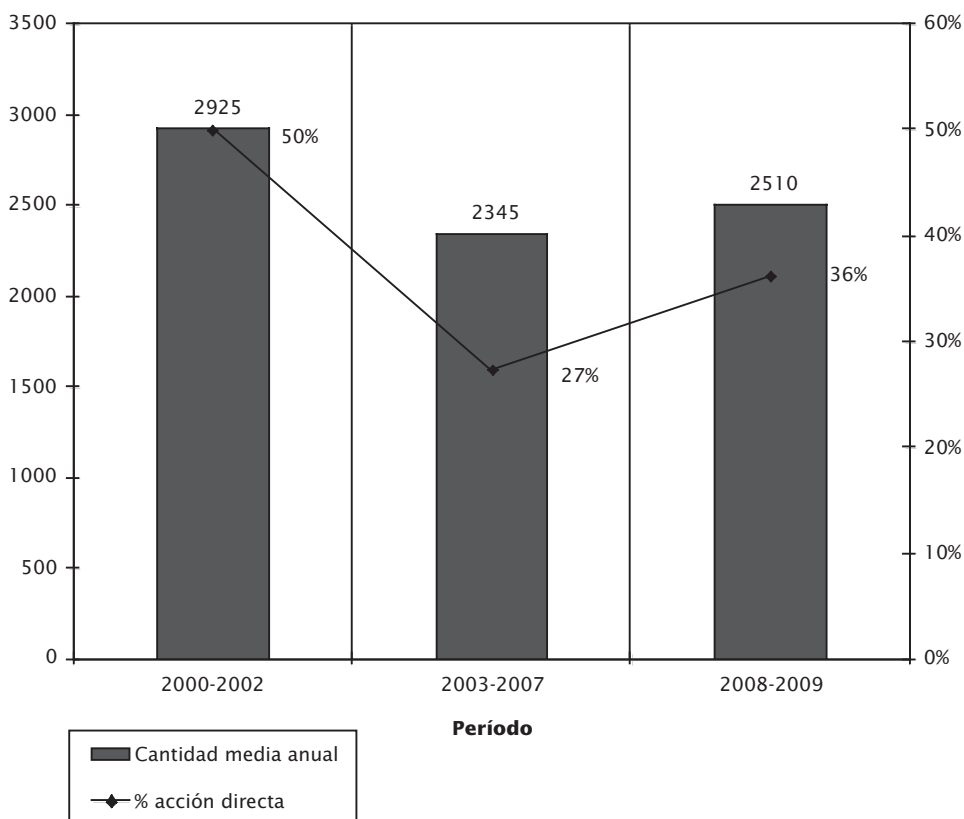
Cuadro 1. Periodización de la década y principales características asociadas a la conflictividad social

Dimensiones	Periodos		
	2000-2002	2003-2007	2008-2009
Contexto social	Crisis del modelo de valoración financiera: recesión y depresión. Crisis política: renuncia de De la Rúa. Gobiernos provisorios. Inestabilidad e ilegitimidad. Crisis social.	Salida de la crisis: fuerte crecimiento económico y lenta recomposición política. Legitimidad de gobiernos electos validados en las urnas.	Crisis política y desaceleración del crecimiento económico. Unificaciones de la oposición política y social, divisiones en el oficialismo.
Caracterización general del conflicto	Politización. Protesta social generalizada. Autonomización descorporativizada y diversificada en sus destinatarios. Contenido progresivo, con peso importante del carácter defensivo en la lucha corporativa.	Institucionalización y corporativización moderada del conflicto. Emergencia de nuevos movimientos. Contenido progresivo, con aumento del peso ofensivo en la lucha corporativa.	Politización y polarización. Autonomización corporativa y regresiva con el gobierno nacional como destinatario.
Cantidad de acciones de lucha	Punto más alto de las acciones de lucha.	Descenso y estabilización a niveles más bajos.	Crecimiento con el punto más alto en 2008, pero sin alcanzar los niveles de 2000-2002.
Formas de lucha	Fuerte intensidad de las acciones directas; en 2001 predominan frente a las indirectas. Las formas de acción directa son lideradas por el corte, pero también alcanzan fuerte intensidad el ataque, la ocupación y los saqueos. La generalización de la protesta conduce a un pico absoluto de movilización.	Descenso de acciones directas y ascenso de las indirectas. La actividad huelguística alcanza sus picos absolutos y relativos. La movilización alcanza su pico relativo.	Aumento paulatino de la acción directa y descenso de la indirecta, aunque con predominancia de la segunda. El crecimiento de las acciones directas se da principalmente a partir del crecimiento de los cortes.
Personificación social	Tendencia al aumento del peso de los desocupados, llegando en 2002 a ser el actor más significativo. La tregua sindical disminuye el peso de los asalariados ocupados a partir de 2002. Es el momento de mayor articulación en acciones de lucha entre ocupados y desocupados.	Reemergencia del conflicto laboral a partir de 2004; aumento y consolidación del peso de los asalariados ocupados. Descenso paulatino y sostenido de la participación de los desocupados. A partir de 2004 adquieren peso los familiares y víctimas de la inseguridad y accidentes. Vinculado a los movimientos socio-ambientales, desde 2006 adquieren importancia los vecinos y pobladores.	Aumento de peso de los propietarios. Durante 2008 superan a los asalariados. Estabilización de la intensidad de la categoría "vecinos y población". Descenso del peso de los asalariados ocupados. Leve ascenso en la participación de los desocupados, aunque con un peso muy poco significativo.
Demandas	En 2001 se da el punto más intenso de la lucha contra el modelo económico y un pico en la exigencia de la renuncia de funcionarios y en defensa de los ahorros. Los salarios adeudados, el empleo, los subsidios y las condiciones de vida son demandas significativas en todo el período.	Asalarización de la conflictividad: crecimiento del reclamo por aumento salarial y por mejoras en las condiciones de trabajo. Disminución marcada de las demandas políticas. Relevancia de demandas de justicia y referentes al medioambiente; estas últimas alcanzan su punto más alto en 2006 y 2007.	Vinculado al conflicto del campo se da un pico intenso de demandas referentes a los impuestos. Descenso de las demandas salariales. En 2009 hay un aumento de las demandas por empleo. Aumento de las demandas políticas.
Destinatarios	Politización: importante peso del gobierno como destinatario pero no en tanto que empleador. Peso significativo de las empresas como destinatario de demandas.	El crecimiento del conflicto laboral da mayor peso al gobierno en tanto que empleador y un aumento significativo del peso de las empresas privadas.	Repolitización: fuerte aumento del peso del gobierno nacional. Emergencia de destinatarios políticos. Hay una disminución del peso de las empresas como destinatarias de demandas en 2008 y un aumento en 2009.

Dimensiones	Períodos		
	2000-2002	2003-2007	2008-2009
Principales hechos de masas	Jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.	Marcha contra la inseguridad (2004), marchas de Gualeguaychú (2007), acto del gobierno del 25 de mayo (2006) y marcha por la aparición con vida de Julio López (2006).	Principales concentraciones a favor y en contra del aumento de las retenciones durante el llamado conflicto del campo (2008).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA y en las cronologías del OSAL.

Gráfico 1. Cantidad media anual de acciones de lucha y porcentaje de acciones que asumen carácter directo por período



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA.

La lucha de los trabajadores asalariados ocupados

En el nuevo contexto social de recomposición política, recuperación económica y mejoramiento de los indicadores laborales –en particular un marcado descenso del desempleo–, surgido tras la crisis de 2001, los trabajadores de la Argentina recuperaron, desde 2004, el dinamismo demostrado históricamente. De esta ma-

nera, los trabajadores ocupados comenzaron nuevamente a desempeñar el rol de vanguardia en las luchas sociales, luego de varios años de fuerte protagonismo de los movimientos de trabajadores desocupados (años 2002 y 2003)⁵.

El renovado dinamismo expresado por los trabajadores ocupados en este nuevo contexto puede constatarse a través de los valores que han registrado al menos dos indicadores: la conflictividad laboral y la negociación colectiva.

Los primeros años de la década estarán marcados por una intensificación de la conflictividad, un marcado carácter defensivo y la unificación del movimiento obrero en varias huelgas generales frente a las medidas de ajuste del gobierno de De la Rúa. Como se desprende del Gráfico 2, la lucha de los asalariados en los años 2002-2003 alcanza niveles históricos sumamente bajos. Este descenso es producto del contexto desfavorable del mercado de trabajo y de la tregua practicada por distintas fracciones sindicales a partir de los procesos de apertura de los gobiernos de Duhalde (2002-2003) y luego de Kirchner. En cambio, a partir de 2004, se experimentó un crecimiento de la conflictividad laboral, alcanzando su punto más alto hacia 2005 (MTSS, 2007; Etchemendy y Collier, 2007).

Esta mayor conflictividad laboral registrada a partir de la recomposición política y económica es expresión en parte de un pase a la ofensiva de la fuerza de trabajo en su lucha corporativa. Si durante la década inmediatamente anterior y en los años 2001 y 2002 fueron mayoritarios, en la perspectiva obrera, los conflictos defensivos, enfrentando particularmente los intentos expropiatorios del capital (salarios adeudados, despidos, reducciones salariales, por ejemplo), en la etapa abierta posteriormente lo dominante fueron los conflictos ofensivos. Esto ha sido así en gran medida debido a los reclamos por incrementos salariales, que han superado los niveles de inflación experimentados durante el período. En 2004, el 62,6% de los conflictos se dio por cuestiones salariales, mientras que en 2005, estos llegaron a ser el 76,3% (Etchemendy y Collier, 2007). Así también, se han registrado numerosos y prolongados conflictos por mejoras en las condiciones de trabajo y de contratación⁶. Este nuevo contexto estará también enmarcado por la inexistencia de huelgas generales que articulen al conjunto del movimiento obrero contra el gobierno nacional.

De igual forma que en los noventa, la conflictividad laboral ha estado dominada por la conflictividad registrada en el sector público de la economía. Por ejemplo, en 2006, del total de conflictos registrados, el 59% se produjo en el sector público, mientras que el resto, el 41%, se dio en el ámbito privado (MTSS, 2007). En la conflictividad de este sector se ha destacado el dinamismo expresado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), enrolada en la alternativa Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) y, en menor medida, por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), ligada a la mayoritaria Confederación General del Trabajo (CGT).

Los sindicatos han sido quienes han conducido mayoritariamente los conflictos laborales. Empero, una serie de conflictos que han concitado la atención de amplias capas de la población y la intervención del Estado nacional –como los diversos conflictos suscitados en los subterráneos de Buenos Aires– han estado conducidos por cuerpos de delegados, comisiones internas o seccionales opositoras a las conducciones nacionales de los sindicatos.

En el caso de los subterráneos, el cuerpo de delegados ha sido la instancia que ha conducido a la fuerza social de los trabajadores en los distintos conflictos, a pesar de la resistencia implementada por el sindicato que los representaba formalmente (la Unión Tranviarios Automotor – UTA). En los últimos años, los trabajadores del subterráneo –conducidos por su cuerpo de delegados– han obtenido mejoras en sus salarios, la reducción de la jornada de trabajo y la reversión de la política de subcontratación, entre otras cuestiones, y se han transformado en un verdadero poder alternativo dentro de la empresa.

Al lograr revertir una porción significativa de los efectos negativos instalados en los subterráneos a partir de la privatización del servicio en los noventa –extensión de la jornada de trabajo y subcontratación, por ejemplo–, estos trabajadores se han transformado en una ejemplificación de la posibilidad de reversión de las consecuencias del neoliberalismo en el ámbito laboral.

Estas experiencias organizativas han despertado fuertes expectativas en determinadas identidades, quienes han visto en ellas espacios a partir de los cuales generar una renovación de las conducciones sindicales.

Desde el punto de vista cuantitativo, la incidencia de los conflictos conducidos por estas instancias ha sido marcadamente minoritaria. Así, para el año 2006, el 83% de los conflictos laborales registrados fue impulsado por un sindicato y el resto se reparte por igual entre el frente gremial y las otras organizaciones, que incluyen a los cuerpos de delegados y las comisiones internas (MTSS, 2007). No obstante, estos conflictos, junto a la permanencia de la CTA y el desarrollo de nuevas organizaciones, marcan una tendencia hacia una mayor pluralidad política y organizativa en la vida sindical.

Con respecto a las formas de lucha instrumentadas en el desarrollo de los conflictos, a diferencia de lo sucedido durante la década anterior, cuando se extendió el uso de las declaraciones de alertas y las movilizaciones en las calles, el paro ha vuelto a ocupar un lugar relevante en este período. Esta forma de lucha tuvo su pico en 2005, alcanzando niveles que duplican el promedio de la década de los noventa. El paro, en varias ocasiones, ha sido implementado en combinación con cortes, bloqueos u ocupaciones de establecimientos.

Esta revitalización de los trabajadores –al menos cuantitativamente– puede también observarse por medio del aumento de las negociaciones colectivas desde 2003, pero especialmente a partir de 2005, según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.

La negociación colectiva ha sido impulsada por el Estado nacional con el objetivo de institucionalizar los diferendos entre el capital y el trabajo, regulando las demandas salariales de los trabajadores. Las pautas salariales sugeridas por el gobierno han sido generalmente acompañadas –no exentas de negociaciones– por el movimiento obrero, particularmente por la Confederación General del Trabajo (CGT), muy próxima a los gobiernos de Néstor Kirchner, primero, y de Cristina Fernández después.

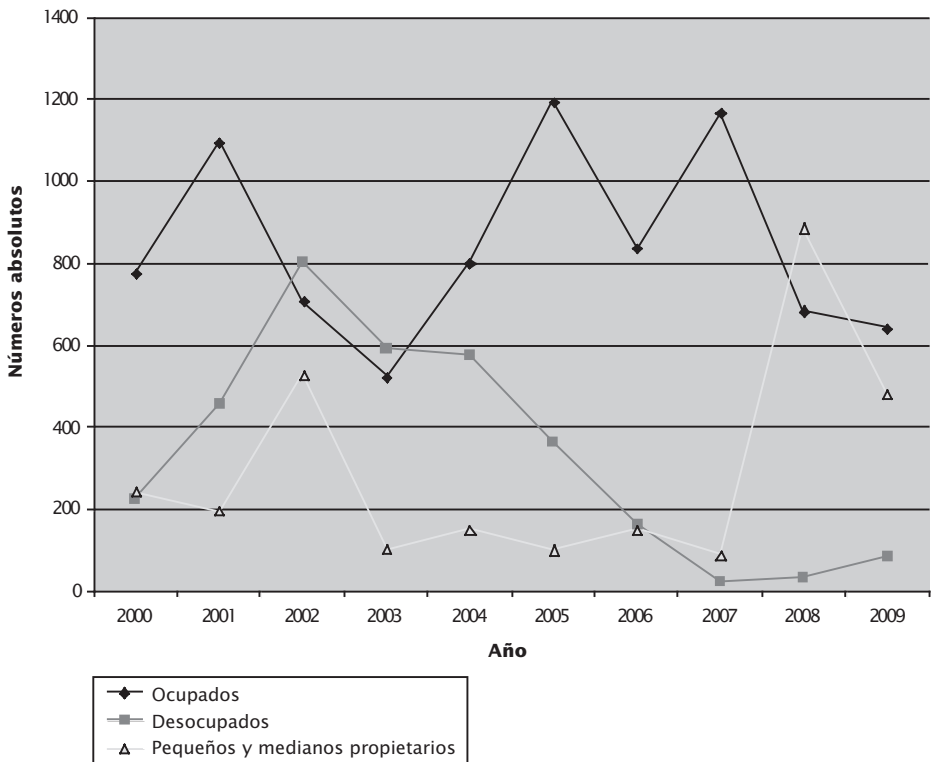
Sin embargo, este crecimiento de la negociación colectiva no ha anulado la conflictividad laboral. De hecho, muchas de las negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo han sido precedidas o mediadas por conflictos.

Entre 2004 y 2008 se han firmado casi 4 mil convenios colectivos, si se cuenta entre ellos a los acuerdos puntuales. Durante estos años, han crecido significativamente los acuerdos y convenios por actividad, que prácticamente habían desaparecido en la década de los noventa. Sin embargo, siguen siendo dominantes los convenios y acuerdos por empresa. En promedio, entre 2004 y 2008, el 66% de las negociaciones colectivas homologadas por el Ministerio de Trabajo de la Nación correspondió al ámbito de empresa, mientras que el 34% al de la actividad.

En las negociaciones colectivas también se pueden observar las relaciones entre el capital y el trabajo desde la recuperación económica y política del país. En este sentido, cabe destacar que, entre 2004 y 2008, el 86% de las negociaciones colectivas homologadas contemplan cláusulas de incrementos salariales.

En suma, en un nuevo contexto económico y político –más favorable en comparación con la década anterior– los trabajadores ocupados de la Argentina han desarrollado una creciente movilización y recuperado el dinamismo demostrado en épocas previas.

Gráfico 2. Evolución de las acciones de lucha de las tres principales personificaciones sociales del período, Argentina, 2000-2009



Fuente: Elaboración propia con base en datos de PIMSA.

Evolución y transformaciones de los movimientos de trabajadores desocupados

Durante la década, en paralelo al cambio del contexto social y político, los movimientos y organizaciones de desocupados, conocidos popularmente como “piqueteros”, experimentarán transformaciones y cambios profundos, atravesando momentos de movilización, rearticulación de fuerzas y reacomodamientos ante el escenario planteado por los nuevos actores de la esfera política.

Al inicio de la década, las distintas organizaciones se encontraban fortalecidas. Larga y penosamente, se habían constituido desde mediados de los noventa, a partir de la movilización en las calles y en su cotidiano trabajo barrial, logrando personificar a sectores pauperizados de la clase trabajadora en procura de la mejora de sus condiciones de vida. Enfrentaban, de diversos modos, los efectos del proceso expropiatorio sobre la fuerza de trabajo resultantes de la reestructuración capitalista que signó dicha década. Su meta originaria fue el reclamo por “trabajo genuino” pero, ante la falta de respuestas del Estado, esta demanda comenzó a ser desplazada por los planes laborales y sociales que el gobierno estaba más dispuesto a otorgar (Svampa y Pereyra, 2003). Inscriptas en una lógica de movilización y protesta propia, que encontraba en el corte de vías de tránsito su herramienta emblemática, nutrieron sus filas de la existencia creciente de trabajadores desocupados sin posibilidad de verse representados sindicalmente y del debilitamiento de las redes de los partidos políticos tradicionales en los barrios populares. En este contexto, las organizaciones piqueteras se transformaron en un verdadero lugar de contención y diálogo, de intercambios y resistencia, de elaboración de proyectos comunitarios y de puesta en práctica de estrategias de acción contra el hambre, la desocupación y la exclusión. La evolución de su accionar en las calles –a lo largo de la década que aborda el presente trabajo– varía en paralelo a los cambios en la situación política, económica y social.

En los primeros años, la dinámica de movilización de las organizaciones piqueteras crece constante y significativamente hasta alcanzar su punto máximo de convocatoria en 2002. Este momento de gran movilización y capacidad de articular con otros sectores sociales en pos de sus reivindicaciones particulares y de metas políticas más trascendentes es también el período en el cual comienzan a intensificarse las contradicciones al interior del movimiento. Hasta la crisis de 2001, aun en la marcada heterogeneidad política e ideológica que expresaban las organizaciones, existían tendencias convergentes en la dinámica de confrontación que hacían posible hablar del “movimiento piquetero”⁷. A partir de la crisis de finales de 2001 y de la renuncia del presidente De la Rúa se acentuarán las tendencias divergentes. Muy tempranamente se intensificaron los distanciamientos, emergiendo divergencias acerca del carácter de la crisis política y las estrategias a seguir. A medida que fue cambiando la situación económica y política, las contradicciones al interior del movimiento se acrecentaron.

Hacia 2003 el movimiento piquetero se encontraba fuertemente establecido en la lógica de movilización y conflicto, aunque su capacidad de convocatoria comenzaba a declinar. Su principal forma de lucha –el corte o piquete en las vías de tránsito– comenzaba a impacientar y desarrollar ma-

lestar en sectores de capas medias urbanas que otrora prestaran un limitado apoyo y cierta tolerancia. Los piqueteros debieron soportar en aquellos días la más dura oposición mediática a sus prácticas de lucha. Sin embargo, aun sin alcanzar la intensidad de 2002, las acciones de lucha de estas organizaciones mantuvieron un fuerte nivel. Recién a partir de 2005 el cambio de etapa impactará cuantitativamente en sus acciones de protesta, iniciándose un marcado y sostenido descenso hasta alcanzar prácticamente un estado de desmovilización en 2007.

La actitud del presidente Néstor Kirchner frente a la cuestión piquetera se tornó evidente desde el comienzo de su mandato. Nunca se mostró dispuesto a pagar el costo político de la represión. Si durante la década anterior las tácticas implementadas por los gobiernos hacia los movimientos fueron de deslegitimación y represión, desde los inicios del gobierno de Néstor Kirchner la perspectiva se transformó. El nuevo gobierno abrió el camino del diálogo y la negociación con las organizaciones. Su estrategia apuntaba a abrir canales de recursos a las organizaciones, en especial a aquellas más afines, y apostar a que el problema de la desocupación se resolviera con crecimiento económico y creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se inicia una política por parte del gobierno que tiende a limitar el uso de la represión ante acciones de protesta –poniendo especial atención a la legitimidad social del uso de la fuerza– y a “dejar actuar” al sistema judicial *a posteriori*.

La búsqueda del gobierno nacional se centraba en poner en marcha, rápidamente y con las organizaciones, proyectos de trabajo que tornaran sin sentido la lógica del corte de calles. Su política de puertas abiertas a los reclamos y de diversificación de la política social pronto profundizarían, aún más, las contradicciones al interior del movimiento. Desde la perspectiva de las organizaciones más críticas –en su mayoría vinculadas a partidos y organizaciones de izquierda– los primeros pasos dados por el presidente fueron catalogados de insuficientes. Las señales de ruptura con algunas de las políticas de los noventa, que pronto se dieron desde el ejecutivo, se comprendieron como insertas dentro de una lógica de doble discurso. Para estas organizaciones, Kirchner venía a continuar el trabajo de Menem y De la Rúa. Estos sectores buscaron y buscan en la actualidad continuar con la lógica de movilización y protesta que durante los noventa les arrojó resultados satisfactorios, colocándolos como representantes legítimos en la lucha social de un sector de los excluidos⁸.

Pero el ciclo económico de recuperación que ya se había iniciado hacia fines de 2002 –y que mostrará un crecimiento constante durante los años siguientes– incidirá en el movimiento piquetero de una forma original: socavando las bases de su reclutamiento, el ejército de desocupados. La capacidad de convocatoria de las organizaciones ya no conocería los niveles del pasado inmediato.

De esta forma, otras organizaciones tomaron conocimiento de la necesidad de definir una relación nueva con los actores políticos. Quienes se sumaron al diálogo y redefinieron pronto su postura frente al nuevo gobierno comenzaron a ser vistos como traidores por sus anteriores compañeros de lucha. Las contradicciones al interior del movimiento piquetero se irían profundizando a medida que el kirchnerismo buscaba fortalecerse y resolvía asincrónicamente muchas de las tensiones

que lo atravesaban. Así, sectores del movimiento se integrarán al gobierno de muy diversas formas como base de apoyo social, y no pocos en puestos de gestión gubernamental. Un amplio espectro de organizaciones, en particular aquellas provenientes de tradiciones políticas vinculadas al nacionalismo popular, desarrollarán acciones en apoyo a políticas planteadas desde el gobierno, trasladándolas a las calles y actuando como un factor de presión hacia empresas, medios de comunicación y políticos de la oposición⁹.

Muchas situaciones políticas durante la década podrían ejemplificar las distancias abiertas entre las organizaciones y las políticas que cada una llevó adelante. Pero quizás el denominado conflicto con el campo ejemplifique mejor que ninguna otra las contradicciones abiertas entre las organizaciones piqueteras. Mientras algunas se movilizaron en apoyo a la postura del gobierno y se transformaron en su sostén en las calles, otras se encolumnaron con las entidades del campo, estableciendo una alianza con los propietarios y las corporaciones rurales bajo el argumento de defender los intereses de los pequeños productores rurales. Las demás organizaciones, sin mayor repercusión, buscaron revertir la polarización de la confrontación apostando infructuosamente a abrir una tercera alternativa¹⁰.

Más recientemente, a fines de 2009, la estructura de oportunidad abierta por el conflicto entre el gobierno y la oposición social y política colaborará en una moderada revitalización de la movilización de distintos grupos piqueteros. Aprovechando la difusión proporcionada por grupos mediáticos enfrentados con el gobierno –algunos de los cuales en su momento fueron artífices de la estigmatización de los piqueteros– retomarán la protesta en las calles en procura de conseguir ser incorporados en programas de trabajo del gobierno nacional, denunciando su discriminación a expensas de la estructura territorial del partido en el gobierno del Estado.

En suma, el movimiento irá perdiendo paulatinamente el protagonismo que otrora supo tener en la conflictividad. La pérdida de capacidad de movilización se dará en paralelo a la apertura de nuevos canales institucionales. Esta nueva situación otorgará en muchos casos un peso creciente a los emprendimientos en los barrios, en la dinámica de la organización, a expensas o desligados de la lucha en la ruta, desdibujándose algunas de las características movimientistas de las organizaciones. Finalmente, la década muestra los rumbos divergentes que tomaron las organizaciones piqueteras en relación con el gobierno y la interpretación de la situación política.

Fábricas recuperadas por sus trabajadores

La recuperación de empresas es la conceptualización con la cual se ha denominado a un conjunto heterogéneo de procesos, en los cuales empresas en crisis son puestas a producir por sus trabajadores. Durante la década, miles de asalariados en todo el territorio de Argentina se han hecho cargo de empresas en crisis.

Inicialmente, la difusión de las recuperaciones expresó una de las respuestas esbozadas por los trabajadores ante la posibilidad de la pérdida del trabajo, en el contexto inédito de crisis económica, política y social que mostraron los años 2001 y 2002. Este contexto de crisis permitió la construcción de una estructura de oportunidades para la conformación de una serie de articulaciones y alianzas

sociales que viabilizaron las recuperaciones. El trabajo como valor social, en un país con tasas inéditas de desempleo, otorgó legitimidad para que un conjunto de trabajadores lograra preservar, por su propia cuenta, su espacio en el mercado laboral (Rebón, 2007).

“...la personificación central del proceso de recuperación de empresas expresa *fuerza de trabajo* que avanza en una embrionaria relación de posesión con los medios de producción”

Al desobedecer al desempleo avanzando sobre la dirección de la producción, los trabajadores de estas empresas recuperadas produjeron cambios e innovaciones en los espacios físicos y sociales que entraron en su posesión. Este avance tuvo en lo inmediato una implicancia sustantiva: conformó un proceso de igualación y democratización creciente frente a la empresa fallida. Diversos indicadores y datos observables daban cuenta de estas transformaciones: la igualación en las formas de apropiación y retiro de la cuenta de utilidades, los criterios y las formas democráticas en las tomas de decisiones, la función de la dirección personificada por el colectivo laboral y las fuertes articulaciones no-mercantiles con el entorno social de la empresa.

Pese a muchos pronósticos pesimistas, aun transformado el contexto de su emergencia, el proceso ha podido desarrollarse sostenidamente, tanto en su forma ampliada (la extensión a nuevas unidades productivas) como en su forma simple (la capacidad de sostenimiento productivo de las empresas recuperadas sin alterar su forma social inicial). Actualmente, estimamos en todo el país la existencia de alrededor de 270 empresas recuperadas. Esta capacidad reproductiva posee dos elementos sustantivos. En primer lugar, el cierre empresarial como inherente a la expansión de la formación social de carácter capitalista y sus efectos en términos de desempleo. En segundo lugar, la difusión de la recuperación como alternativa viable, realizable, para enfrentar dichos efectos, es decir, la incorporación de dicha alternativa a la “caja de herramientas” de los trabajadores (Rebón, 2007; Rebón y Salgado, 2009). Así, en tanto la desaparición de empresas es un elemento estructural del capitalismo, una vez que esta alternativa se instala socialmente –aun cuando se revierta parte de los factores que conformaron su génesis– su difusión puede continuar mientras permanezcan niveles significativos de desempleo y las condiciones políticas no se vuelvan abiertamente hostiles a la experiencia (Rebón y Salgado, 2009).

Sin embargo, más allá de la capacidad de ampliación de las recuperaciones y de la capacidad del sostenimiento productivo evidenciado por estas experiencias, muchas de las innovaciones sociales no han podido consolidarse. Con el desarrollo de la vida productiva de estas empresas, la lucha por poder competir en un mercado en condiciones de dominio capitalista limita las capacidades innovadoras del proceso. Más allá de sus limitaciones y su magnitud, estas experiencias han implicado una mayor influencia directa de los trabajadores sobre la esfera de la “economía” y, por lo tanto, grados crecientes de empoderamiento

social sobre la propiedad privada, el uso y el control de recursos y actividades económicas (Rebón y Salgado, 2009). En este sentido, la personificación central del proceso de recuperación de empresas expresa *fuerza de trabajo* que avanza en una embrionaria relación de posesión con los medios de producción. Representa, frente al punto de origen, un empoderamiento social al conformar una nueva relación con sus medios de producción, a partir de una nueva articulación, al interior y al exterior de la unidad productiva, con otras personificaciones sociales.

La lucha socio-ambiental

La expansión capitalista en diferentes actividades extractivas e industriales con fuerte impacto ambiental fue resistida por la conformación de nuevos movimientos sociales. Las distintas resistencias al avance de la minería a cielo abierto y el masivo movimiento emergente en la ciudad de Gualaguaychú contra la instalación de papeleras en Fray Bentos, Uruguay, configuran sus ejemplificaciones emblemáticas.

Diferentes cambios institucionales acaecidos durante los noventa favorecieron la expansión de procesos de explotación minera a cielo abierto por parte de empresas transnacionales. El desarrollo de estos enclaves extractivos ha tenido un fuerte impulso durante la década en estudio, contando con medidas favorables por parte del gobierno nacional en alianza con los gobiernos locales. Dicha expansión implicó un verdadero proceso expropiatorio de los recursos naturales –por las condiciones leoninas a favor de las empresas– y provocó graves costos ambientales –contaminación, uso irracional de otros recursos naturales, desertificación– que alteraron otras actividades económicas, como han sido las agropecuarias y turísticas.

El carácter depredatorio de estos enclaves ha sido enfrentado –en diferentes territorios– por diversas alianzas sociales que lograron éxitos parciales, como la no apertura de minas –en la ciudad de Esquel en el año 2003–, leyes limitativas de la minería –en las provincias de Chubut en 2003, Río Negro en 2005, La Rioja, Tucumán, Mendoza y La Pampa en 2007, Córdoba y San Luis en 2008–, y la conformación de una red de territorios en resistencia –la Unión de Asambleas Ciudadanas– que se articularon asambleariamente y coordinaron acciones de diverso tipo.

La lucha defensiva de estos movimientos y organizaciones no ha logrado detener la expansión capitalista en este campo, aunque sí le ha puesto ciertos límites, obligando a las empresas y gobiernos a nuevas estrategias para resolver estos obstáculos.

Las resistencias contra la minería han tenido mayor éxito en aquellas provincias con mayor heterogeneidad social, económica y cultural. Por el contrario, en aquellas con matrices más jerárquicas, escasa diversificación económica y cultural y altos índices de pobreza –como las del Noroeste del país– la capacidad de resistir el poder de la minería en conjunción con el poder político local ha sido más desfavorable. En estos últimos territorios no se lograron leyes que limiten dichos desarrollos o, cuando se lograron, fueron luego revertidas, como en el caso de La Rioja (Svampa y Antonelli, 2009).

Otro conflicto que instaló la dimensión socioambiental fue el protagonizado por la asamblea ciudadana ambiental de Gualaguaychú. Esta se constituyó hacia 2005, luego de una gran movilización contra la instalación de dos fábricas papeperas en la vecina localidad de Fray Bentos, en la República Oriental del Uruguay.

El conflicto logró instalar socialmente a nivel nacional el problema de la contaminación que podían producir dichas plantas, con base en una intensa movilización y recurrencia a la acción directa –entre ellas el corte casi permanente del puente internacional que une Fray Bentos con Gualaguaychú. La demanda ambiental se cruzó con la cuestión nacional y local. Precisamente, el movimiento se desarrolló en el lado de la frontera que no iba a recibir los beneficios de las plantas (trabajo y dinamismo económico) y sí sus costos (contaminación).

El movimiento provocó que el gobierno nacional se posicionara sobre el tema recurriendo a tribunales internacionales y que procurara revertir y/o modificar la instalación y funcionamiento de las plantas. Como resultado del proceso, se logró evitar la instalación de una de las mismas.

La movilización social de carácter regresivo

Los procesos de movilización social de carácter regresivo han sido una de las novedades del período. El retroceso político-institucional de sectores de las clases dominantes –en particular su desplazamiento parcial del gobierno nacional a partir de 2003– condujo a la emergencia de procesos sociopolíticos basados en la movilización de masas en defensa de sus intereses. La pérdida de poder institucional fue contrarrestada en diferentes momentos con la activación y apelación a acciones que excedían los canales institucionales. En particular por su relevancia, masividad e impacto político, deben ser destacados dos procesos que tienden a la reestructuración regresiva del poder social¹¹.

El primero lo encontramos en 2004, en pleno ascenso del gobierno de Néstor Kirchner, con el movimiento liderado por Juan Carlos Blumberg en pos de un endurecimiento de las normas penales como forma de lucha contra la “inseguridad ciudadana”¹². Padre de una víctima de un secuestro que culmina en asesinato, Blumberg, con la ayuda de diversos medios de comunicación y del poder político y económico, logra convertirse socialmente en la personificación del ciudadano-víctima de la delincuencia. Consigue movilizar a un importante conjunto de la población –en particular de los estratos sociales más acomodados– a través de marchas y peticiones. En los hechos, protagoniza la principal acción de masas durante el gobierno de Kirchner; su primera movilización en la ciudad de Buenos Aires es acompañada por alrededor de 150 mil personas. El movimiento logra promover la sanción de leyes que implicaron un significativo endurecimiento del sistema penal. Por un lado, se agravaron las penas de ciertos delitos penales y, por el otro, se dificultaron las condiciones para la obtención del beneficio de la libertad condicional. La mayoría de los proyectos de ley definitivamente sancionados fueron presentados con anterioridad al inicio de las movilizaciones. La génesis de estos proyectos forma parte de una agenda previa sobre la temática de la seguridad realizada por sectores mediáticos y políticos, que encuentra en el movimiento encabezado por Blumberg la fuerza

social para su avance (Calzado y Van Den Dooren, 2009)¹³. Si bien el proceso tiene una dimensión política, nunca logra trascender la temática puntual de la “inseguridad”, ni logra antagonizar con un gobierno nacional en ascenso que se comporta de forma ambigua frente al mismo.

“La lucha contra las retenciones involucró y alineó al conjunto de la población, conformando una dualidad de poder que paralizó al país y desabasteció a los principales centros urbanos”

El segundo proceso es mucho más relevante tanto por su masividad como por sus implicancias políticas. Nos referimos al denominado “conflicto del campo”. Dicho conflicto logra politizar, movilizar y polarizar a la sociedad como ningún otro en la década¹⁴. En marzo de 2008, meses después de haber asumido, la presidenta Cristina Fernández decide elevar la alícuota de retenciones a la exportación de diversos granos, en especial a la soja, y vincular su variación a la del precio internacional de los productos. La medida se da en un contexto de elevada rentabilidad de su venta al exterior. Más aun, dicha medida altera la rentabilidad futura pero sin disminuir la rentabilidad con respecto al año previo. Sin embargo, y para sorpresa del gobierno, que toma la medida sin imaginar sus consecuencias políticas, las principales entidades corporativas de los propietarios y patrones del agro se unifican en reclamo de la derogación de la medida. La Sociedad Rural Argentina, las Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria deciden no comercializar granos ni carne estableciendo verdaderos controles de las rutas –“cortes”– para garantizar la efectivización de la medida¹⁵. Se inicia así un intenso conflicto en el cual los propietarios agrícolas, a semejanza de diversos movimientos sociales de los sectores populares, van a centrar su movilización en la acción directa –cortes y escraches, por ejemplo– y en la práctica asamblearia. El conflicto unificará a los distintos estratos de la propiedad rural tras un proyecto hegemonizado por sus sectores más concentrados¹⁶. Si bien se trata de población perteneciente a los deciles superiores del país en lo referente a la magnitud de los ingresos percibidos, existen entre los integrantes de esta fuerza significativas diferencias por las magnitudes de sus propiedades y función productiva, así como por sus historias sociales y políticas. Los pequeños productores primarán en la composición social movilizada a la vera de las rutas, aunque nunca lograrán hegemonizar el conflicto ni escindir su propio interés del de los sectores más concentrados. El gobierno, pese a sus tardíos intentos, en ningún momento podrá quebrar la unidad alcanzada por esta alianza social.

El conflicto es promovido desde el primer día por los principales oligopolios mediáticos y va a lograr condensar el malestar social acumulado, principalmente, por las medidas reformistas de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Todos aquellos sectores de las clases dominantes y sus personificaciones políticas y corporativas que sintieron afectados sus intereses –más políticos que económicos– aprovecharán la oportunidad para atacar y debilitar al gobierno. Tendrán su base de apoyo en la cultura de la propiedad privada –contra la confiscación del Estado– y en la conciencia antiperonista de las capas medias –sector histórico del antiperonismo–

y contarán con la complicidad de algunos destacamentos de izquierda que apostaban al debilitamiento del gobierno como paso previo a un proceso de radicalización política. También se apoyarán en el prematuro desgaste de un gobierno que no lograba frenar una creciente inflación que minaba la recuperación salarial lograda en los años previos por los trabajadores y se exponía constantemente al ridículo público al falsear el índice de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), minando así la credibilidad de su palabra. El conflicto del “campo” se fue convirtiendo en una disputa por la direccionalidad política del país. La lucha contra las retenciones involucró y alineó al conjunto de la población, conformando una dualidad de poder que paralizó al país y desabasteció a los principales centros urbanos. El conflicto expresó el más intenso proceso de movilización posterior a 2001. Cada fuerza cortó transversalmente la pirámide social con diferentes composiciones. Mientras las movilizaciones del “campo” tuvieron una composición social en la cual tuvieron un fuerte peso, además de los sectores vinculados a los propietarios rurales, los estratos altos y medios altos de los centros urbanos, el gobierno basó su movilización en los trabajadores organizados gremialmente y en los pobres urbanos, junto a grupos de intelectuales progresistas¹⁷. Pero la magnitud de la fuerza de masas fue diferente. Pese a la masividad de sus movilizaciones, la fuerza liderada por el gobierno no logra contar con una adhesión espontánea de las masas; el entramado organizativo del Partido Justicialista, sindicatos y movimientos sociales afines pierde en las calles y en las rutas frente a la fuerza del “campo”. La falta histórica de una propia política organizativa de masas y la carencia de coherencia política en su determinación reformista le restan claridad y consistencia en los sectores populares. La derrota en las calles precede y se articula con la derrota institucional: la medida no logra contar con la adhesión del Congreso Nacional, votando el propio vicepresidente en su contra. Se inicia así un nuevo período de crisis política, con un gobierno debilitado por las fuerzas políticas y sociales regresivas. Un año después, el gobierno ve disminuido marcadamente su caudal electoral en las elecciones legislativas, perdiendo la mayoría parlamentaria. No obstante, la pérdida de la “batalla del campo” no puede ser confundida con una derrota estratégica de la fuerza que ocupa el gobierno del Estado. Al contrario, el gobierno lanzará con posterioridad varias de sus medidas más progresivas, entre ellas la estatización de la jubilación privada, una nueva ley de medios de comunicación de carácter antimonopólico y la asignación universal por hijo.

La década en disputa

El período que hemos descripto en este trabajo plantea evoluciones novedosas en las luchas sociales de los sectores populares. Dichas evoluciones expresan, pero también configuran, las transformaciones sociales y políticas ocurridas en la Argentina reciente.

La década se inicia con la crisis del modelo de acumulación resultante de la reestructuración regresiva de la sociedad argentina. El agotamiento de dicho modelo se expresó en una profunda crisis social. La protesta y disconformidad social generalizada no fue ajena al establecimiento de límites políticos a dicho modelo. La caída del gobierno de De la Rúa, enmarcada en las jornadas de intensa movilización y autonomización de diciembre de 2001, es clara expresión de ello¹⁸. La crisis

política, observada desde el espacio público de las calles, rutas y plazas representó un intenso proceso de movilización, politización y autonomización que expresó el malestar de heterogéneos sectores sociales. A pesar de diversos intentos, dicha movilización no logró ser articulada en una direccionalidad estratégica por sus propios protagonistas. La salida a la crisis capitalista asumió un carácter capitalista. La salida a la crisis política fue liderada por sectores de la “clase política”. Sin embargo, dichas afirmaciones no pueden dejarnos de señalar la emergencia de puntos de inflexión. Se constituye, y lentamente se consolida, una nueva alianza social en el gobierno del Estado que establece significativos puntos de ruptura en el campo económico, político y social con el período anterior. Esta alianza reconstituye el orden político y social prestando particular atención al clima de movilización y de malestar previo. En los hechos va a retomar selectivamente parte de su agenda y tener en cuenta en su accionar el horizonte de potencial “estallido” que obstaculizaba ciertas posibilidades de acción e impulsaba otras. Estos cambios, aun sin lograr revertir los niveles de desigualdad consolidados en el período previo, lograron mejorar las condiciones de vida y trabajo de amplios sectores sociales. Sin permitir hablar de la existencia de una Argentina “posneoliberal”, plantearon algunas reversiones y transformaciones de los cambios regresivos de épocas previas. Sin que se “fueran todos”, también produjeron el desplazamiento de parte de las personificaciones políticas e institucionales más regresivas del período anterior. El carácter parcial de los cambios nos plantea diversos interrogantes. ¿Expresa el gatopardismo de un gobierno que obtura la posibilidad de una transformación más profunda? ¿Representa su falta de voluntad de transformación? ¿Es simplemente la resultante de su carencia de la suficiente fuerza social para llevarlos a cabo? ¿Es resultante de la dinámica de confrontación que en parte trasciende la voluntad previa de sus protagonistas? Si esto último es así, ¿en qué direccionalidad opera en cada momento? Futuras investigaciones del período podrán desentrañar con mayor rigor el peso relativo en la realidad de las tesis presentes en los interrogantes planteados.

Este nuevo contexto político y social, como hemos mostrado, produjo cambios significativos en las luchas sociales y en los movimientos y organizaciones que personificaban a las clases populares. Al desarrollo de las tensiones que hemos planteado en la direccionalidad del gobierno, se producen realineamientos al interior del movimiento popular; algunos establecen alianzas y treguas de diferentes características con el mismo. En el otro extremo, otros continúan como si nada hubiera pasado. Así también cambia el carácter de clase de las confrontaciones sociales analizadas. De las luchas por detener los procesos expropiatorios ejecutados en la perspectiva de diferentes identidades sociales dominantes en los primeros años, se pasa a una etapa en que asume nuevo impulso la lucha por la mejora en las condiciones de explotación en la perspectiva de la fuerza de trabajo. En paralelo a la recomposición política y a la asunción del gobierno de parte de la agenda democrática, se produce un proceso de institucionalización y corporativización de la lucha social. No obstante, con nuevas características, la lucha social y sus emergentes organizativos siguen teniendo una rica e importante diversidad. Entre ellos podemos señalar los movimientos contra la impunidad del pasado o del presente o la sociogénesis de movimientos que cuestionan –con diferente intensidad– el impacto ambiental del carácter productivista de la renovada expansión capitalista.

Por último, un fenómeno novedoso es el desarrollo de procesos de movilización social regresivos. La autonomización parcial del gobierno con respecto a sectores de la clase dominante configura una situación original. Sectores sociales que sienten haber perdido poder institucional apelan a la vía extra institucional y a dinámicas características de movimientos sociales procurando la acumulación de fuerzas para la realización de sus intereses corporativos y políticos. La emergencia y consolidación de estos sectores, la posibilidad del desplazamiento de la fuerza en el gobierno y la posible reversión de algunos de los cambios progresivos alcanzados actualizan la pregunta sobre la relación entre los movimientos sociales y el gobierno, entre lo social y lo político, entre la autonomía y la disputa de la direccionalidad política, entre la lucha democrática y la anticapitalista. Tensionada entre la necesidad de preservar la autonomía necesaria para la defensa de sus intereses de clase y la necesidad de intervenir en las confrontaciones políticas centrales del período –dado que no les son ajenas en sus resultantes–, se debate para los sectores populares la posibilidad de construir una estrategia que viabilice la profundización de la lucha democrática, paso necesario para cualquier estrategia de transformación radical del orden social. Debates y tensiones por cierto no ajenos, con sus particularidades e intensidades, a otros territorios de nuestra América Latina.

Bibliografía

- Aronskind, Ricardo 2008 "Interés general o renta particular" en *Página 12* (Buenos Aires) Suplemento del vigésimoprimer aniversario, 26 de mayo.
- Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicolás 2009 "Características estructurales y alianzas sociales en el conflicto por las retenciones móviles" en Arceo, Enrique; Basualdo, Eduardo y Arceo, Nicolás *La crisis mundial y el conflicto del agro* (Buenos Aires: CCC/Página 12/UnQui).
- Calzado, Mercedes y Van Den Dooren, Sebastián 2009 "¿Leyes Blumberg? Reclamos de seguridad y reformas penales" en *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*. (Buenos Aires: IIGG/Ediciones de la Universidad Nacional del Litoral) N° 27. En prensa.
- Cotarelo, María Celia 2005 *Aproximación al análisis de los sujetos emergentes en la crisis de 2001-2002 en Argentina* (Buenos Aires: PIMSA) Serie "Documentos y comunicaciones".
- Etchemendy, Sebastián y Collier, Ruth 2007 "Golpeados pero de pie: resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina. 2003-2007" en *Politics & Society* (Thousand Oaks: Sage Publications) Vol. 35, N° 3.
- Giarracca, Norma y Teubal, Miguel 2007 "La rebelión de 2001: protestas, rupturas y recomposiciones" en Giarracca, Norma (comp.) *Tiempos de rebelión: "Que se vayan todos". Calles y plazas en la Argentina: 2001-2002* (Buenos Aires: Antropofagia/GEMSAL).
- Gómez, Marcelo 2009 "La acción colectiva sindical y la recomposición de la respuesta política estatal en la Argentina. 2003-2007" en Neffa, Julio; De la Garza, Enrique y Muñiz Terra, Leticia (comps.) *El mundo del trabajo en América Latina. Permanencia, Diversidad y Cambios*. (Buenos Aires: CLACSO/CEIL-PIETTE) Vol. II.

- Maneiro, María 2009 “La doble vía de la experiencia en los movimientos de trabajadores desocupados” en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.) *Resistencias Laborales: Experiencias de re-politización del trabajo en Argentina* (Buenos Aires: Aleph/Insumisos).
- Massetti, Ástor 2009 *La década piquetera (1995-2005). Acción colectiva y protesta social de los movimientos territoriales urbanos*. (Buenos Aires: Nueva Trilce).
- Pereyra, Sebastián; Pérez, Germán y Schuster, Federico 2008 *La huella piquetera. Avatares de las organizaciones de desocupados después de 2001*. (Buenos Aires: Ediciones al Margen).
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTSS) 2007 *Estadísticas de conflictos laborales*.
- Rebón, Julián 2007 *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción*. (Buenos Aires: Colectivo Ediciones/Ediciones PICASO).
- Rebón, Julián 2009 “Acción directa y procesos emancipatorios” en *Proyecto. Conceptos Fundamentales de Nuestro Tiempo*. (México: IIS-UNAM) inédito.
- Rebón, Julián y Salgado, Rodrigo 2009 “Empresas recuperadas y procesos emancipatorios” en Lenguita, Paula y Montes Cato, Juan (comps.) *Resistencias Laborales: Experiencias de re-politización del trabajo en Argentina* (Buenos Aires: Aleph/Insumisos).
- Schuster, Federico et al. 2006 *Transformaciones de la protesta social en Argentina. 1989-2003*. (Buenos Aires: IIGG-UBA).
- Svampa, Maristella 2005 *La sociedad excluyente* (Buenos Aires: Taurus).
- Svampa, Maristella 2008 “Argentina: Una cartografía de las resistencias (2003-2008). Entre las luchas por la inclusión y las discusiones sobre el modelo de desarrollo” en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) Año IX, N° 24, octubre.
- Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta 2009 *Minería Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales* (Buenos Aires: Biblos).
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteros*. (Buenos Aires: Biblos).
- Teubal, Miguel 2008 “La culpa es de la soja” en *Página 12* (Buenos Aires) Suplemento del vigésimoprimer aniversario, 26 de mayo.

Notas

1 Los límites de los períodos se han delimitado en años por restricciones en las fuentes con las cuales contamos. Si bien podrían hacerse subperiodizaciones en cada etapa, no las consideramos pertinentes para los fines descriptivos de las principales tendencias que posee este trabajo.

2 Nos referimos a los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y, posteriormente, al de Cristina Fernández –quién asume en 2007–, pertenecientes al Frente para la Victoria –fuerza de centro izquierda con eje en el Partido Justicialista. El cambio de la política de gobierno planteará un conjunto de confrontaciones progresivas. Dichas confrontaciones, ejercidas con particular intensidad en los momentos de mayor debilidad política de la fuerza en el gobierno, recrearán

el espacio de la política configurando nuevos márgenes de autonomía frente a los sectores más concentrados de la clase dominante y de los centros de poder internacional, promoviendo con relación a la década previa una mayor integración parcial de intereses de las clases subalternas a la política de gobierno. De este modo, se desarrolla una renovación parcial de ciertas instituciones –la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las Fuerzas Armadas, por ejemplo–, un avance sobre algunos asuntos pendientes de la agenda democrática –la promoción de los juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar y la ley de servicios audiovisuales– y una política internacional que fortaleció la autonomización regional. También se desarrolla una

política económica más heterodoxa, que incluyó una mayor intervención del Estado sobre la economía, junto a una política laboral y social que, en articulación con la política económica, promovieron una recuperación del salario, el descenso de la pobreza y la desocupación, y la ampliación de la cobertura de los sistemas de protección social y previsional. La agenda reformista tuvo distintos avances y retrocesos a lo largo de ambos gobiernos y no estuvo exenta de medidas contradictorias o de estar prácticamente ausente en diversas áreas fundamentales. Por otra parte, no logró modificar significativamente los niveles de desigualdad social, ni el desmantelamiento del Estado desarrollado en las décadas previas. Menos aun logró transformar progresivamente a los actores e instituciones políticas; en este campo, pese a la existencia de distintos momentos de apertura, existió un marcado continuismo.

3 Precisamente una de las improntas que deja culturalmente la etapa precedente, en la caja de herramientas de la lucha de diversas identidades sociales, es la difusión de formatos directos de confrontación. Este cambio cultural será uno de los nutrientes de una significativa propensión a la acción directa que marca a toda la década.

4 Una porción sustantiva de la agenda histórica de los organismos de derechos humanos será convertida en la política del gobierno. Esto producirá, por una parte, un apoyo de la mayoría de dichos organismos; por la otra, distintas respuestas de los sectores enjuiciados por la nueva política, entre ellas la desaparición de Jorge Julio López, testigo de una de las causas realizadas contra los acusados por el genocidio producido durante la última dictadura militar.

5 Cabe destacar que el carácter corporativo de las principales estructuras sindicales en la Argentina las incapacitó para organizar a los trabajadores expropiados de su inserción laboral. Así, los movimientos de trabajadores desocupados y de fábricas recuperadas crecerán por fuera de las estructuras sindicales dominantes y en muchas ocasiones sin relación alguna con las centrales o corrientes sindicales.

6 La lucha contra la precarización laboral por parte los trabajadores y los cambios en la política laboral, en un contexto de crecimiento industrial, lograron—contrastando con las tendencias de la etapa previa—comenzar a disminuir el trabajo no registrado.

7 La fragmentación política y social de los sectores populares es una característica central de la Argentina reciente que se expresará de modo particularmente intenso en los movimientos y organizaciones desarrolladas en el campo de los trabajadores expropiados de su inserción salarial. Tanto entre los desocupados como entre los trabajadores de fábricas recuperadas cada destacamento político tenderá a la construcción de un movimiento propio retroalimentando inercialmente la fragmentación preexistente.

8 Cabe destacar que este éxito en la representación en la lucha social nunca logra validarse políti-

camente en elecciones; por el contrario, los intentos electorales que realizan algunas organizaciones—afines u opositoras al gobierno—fracasaron estrepitosamente.

9 Los resultados de la apertura del gobierno hacia los movimientos fueron conceptualizados por distintos analistas como “institucionalización”, “cooptación” y “estatalización” del movimiento piquetero. Desde nuestra perspectiva, si bien la disminución de la recurrencia a la acción directa y la apertura de diversos canales a las instancias de gobierno podrían ser conceptualizados como institucionalización, no debe olvidarse el carácter parcial de dicho proceso, dado que no se constituyó ningún diseño institucional específico que reconozca formalmente a las organizaciones otorgándoles derechos y obligaciones. Menos precisos nos parecen los señalamientos de cooptación—al menos de forma generalizada—cuando muchos de los grupos que se incorporan al gobierno guardan márgenes de autonomía importantes que los llevan en ocasiones a dimitir de los puestos de gobiernos por diferencias con la política oficial. Por otra parte, esta mirada despectiva soslaya las afinidades electivas que existen entre las tradiciones políticas del gobierno y la mayoría de dichas organizaciones, así como la existencia de coincidencias programáticas. Más desafortunada aun es la categorización de estatalización, dado que a algunos de los considerandos anteriores se le suma el error de no distinguir entre gobierno y Estado, distinción central para entender el período.

10 La consigna de esta tercera tendencia será: “Ni con las patronales del campo ni con el gobierno K”.

11 Entendemos que un proceso tiene un carácter social regresivo cuando procura ampliar o conservar privilegios sociales de determinados grupos en detrimento de sectores menos aventajados (Rebón, 2009).

12 Durante la década, la temática vinculada a la denominada inseguridad urbana dio lugar a formas de lucha con disímiles caracteres sociales. Se desarrollaron diferentes acciones, desde las movilizaciones de vecinos reclamando justicia hasta los violentos ataques a casas de presuntos victimarios en barrios populares. En el campo de los trabajadores organizados, en especial del transporte, se realizaron huelgas, cortes y movilizaciones para protestar frente a robos, asesinatos y vejaciones de diverso tipo. Sin embargo, el proceso personificado por Blumberg es el único que logra producir impacto nacional durante un período significativo.

13 Unos años más tarde Blumberg dejó de ser un referente masivo luego de haber sido denunciado por usurpar el título de ingeniero y de fracasar estrepitosamente en su presentación como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

14 Precisamente el otro gran momento de politización y movilización de la población se da a fines de 2001 y principios de 2002, al compás del momento

más intenso de la crisis. No obstante, a diferencia de este conflicto, no se produce una polarización y una embrionaria dualidad de poder. Al contrario, los procesos de autonomización y protesta que canalizan en aquel entonces el malestar social nunca logran coordinarse en una direccionalidad estratégica. Pese a la voluntad de muchos destacamentos, la autonomización no logra polarizar el ordenamiento social configurando la posibilidad de la dualidad de poder.

15 Estas entidades conforman una "Mesa de Enlace" que se atribuirá la representación del "campo". No obstante, otros actores de la vida rural aprovecharán la oportunidad para expresar públicamente sus contradicciones con los intereses allí representados. En particular, nos referimos a los campesinos y pueblos originarios vinculados a la producción familiar, que durante toda la década resistieron la expansión capitalista en las áreas rurales y los procesos expropiatorios que la misma implicó.

16 Estratégicamente, estos sectores procuraban incrementar sus beneficios definiendo un patrón de acumulación que subordinase a los asalariados y a la

industria a los propósitos de su expansión (Basualdo y Arceo, 2009).

17 Cada fuerza, al cortar transversalmente la estructura social, contará con apoyos en los sectores en que menos peso relativo tiene. Por ejemplo, el conflicto produce una escisión en la Confederación General del Trabajo (CGT), que apoyará al campo. También algunos movimientos piqueteros, buscando la "rebelión de los chacareros" y "la reforma agraria", se sumarán a la fuerza social regresiva. Por el contrario, el gobierno encontrará más dificultades en alinear a los sectores capitalistas beneficiados con su política económica; la rentabilidad extraordinaria obtenida durante el período precedente no será motivo suficiente para apoyar sin ambigüedades a un gobierno que viven como políticamente ajeno y que tiene más margen de autonomía de los lobbies empresariales de la que estos están dispuestos a aceptar.

18 No obstante, esto no debe dejar de soslayar la participación decisiva que han tenido diferentes personificaciones políticas de las clases dominantes en la caída de dicho gobierno (Rebón, 2007).